

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 1140  
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2020-00028-00  
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SINGULAR  
EJECUTANTE: ARIEL URIBE OROZCO  
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES  
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  
ASUNTO: Libra mandamiento de pago

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

**I. ASUNTO**

Se decide sobre el pedimento de librar mandamiento ejecutivo en los términos solicitados en la demanda de la referencia.

**II. ANTECEDENTES**

El señor Ariel Uribe Orozco, por conducto de apoderado especial, en demanda ejecutiva, formuló las siguientes pretensiones (fls. 1 a 11):

*"Se libre mandamiento de pago, a favor del señor ARIEL URIBE OROZCO y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (de ahora en adelante UGPP), representada legalmente por la Doctora GLORIA INÉS CORTES ARANGO, y/o o quien haga sus veces o quien ella designe, por los siguientes conceptos y sumas de dinero relacionados a continuación:*

1. Por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$7.443.674,34 MCTE) por concepto de la diferencia de la sumas descontadas por aportes y ordenados dentro del proceso de la referencia, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado 27 Administrativo Oral Del Circuito de Bogotá D.C., sección segunda, que dispuso que: (...) se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar, solo en el porcentaje que la corresponda por ley al accionante conforme a la parte motiva de la sentencia (...), confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección "B", mediante sentencia del 27 de julio de 2017.

2. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a pensión del CINCO por ciento (5%) de aportes que estimaba la normatividad vigente (ley 4ª de 1966, ley 33 de 1985), del tiempo laborado entre el 15 de mayo de 1980 y 31 de marzo de 1993.

3. Se realice la liquidación sobre la proporción que corresponde la pensión del once punto cinco por ciento (11.5%) de aportes en los términos de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.

4. Se realice la liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del doce punto cinco por ciento (12.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de diciembre de 1995.

5. Se realice una liquidación sobre la proporción que corresponde a la pensión del trece punto cinco por ciento (13.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2003.

6. Se realice una liquidación sobre la proporción que correspondía pensión del catorce punto cinco por ciento (14.5%) de aportes en los términos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, del tiempo laborado entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

7. Por los intereses moratorios de los dineros que por concepto de la diferencia de la suma descontadas arbitrariamente por la UGPP y ordenados el proceso de la referencia, mediante sentencia del 19 de abril de 2018. Causados desde el día siguiente del pago del retroactivo, hasta la fecha en que se cancele la suma, equivocadamente descontada.

8. Se condene en costas a la parte demandada".

Allegó como base del recaudo compulsivo copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 18 de diciembre de 2015 por este juzgado y el 27 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "B", en el proceso ordinario No. 11001-33-35-2013-00038-01, con constancia de ejecutoria del 4 de agosto de 2017.

También aportó copia auténtica de la Resolución No. RDP 039514 del 28 de septiembre de 2018, por la cual el Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social re-liquidó la pensión de vejez del actor en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la que además se indica que el 6 de agosto de 2018 se presentó la solicitud de cumplimiento de la sentencia (fls. 47 a 54); del cupón de pago del mes de noviembre de 2018 del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP, en el cual consta que al señor Ariel Uribe Orozco se le descontó la suma de \$10'769.503 por concepto de *REINTEGROS NACIÓN DESCUENTOS POR APORTES* (fl. 16); y la certificación electrónica de tiempos laborados "CETIL" expedida el 22 de enero de 2020 por la Subdirectora de Gestión Humana del Ministerio del Interior y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Hacienda, en la cual figuran los factores salariales devengados por el actor desde el mes de mayo de 1980 hasta el 31 de diciembre de 2004 (fls. 64 a 82).

### III. CONSIDERACIONES

El artículo 104, numeral 6, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) prevé que esta jurisdicción está instituida para conocer de los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y conciliaciones aprobadas por la jurisdicción; al paso que el artículo 297, numerales 1 y 2 *ibidem*, dispone que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias y las decisiones en firme dictadas en desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible; mientras que el artículo 215, inciso 2 *ejusdem*, consagra que cuando se trate de un título ejecutivo, el documento que lo contenga deberá cumplir los requisitos exigidos en la ley.

Por su parte, el artículo 422 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA., dispone que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, y los demás documentos que señale la ley; al paso que el artículo 114, numeral 2 *ibidem*, consagra que las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de ejecutoria.

A su turno, el artículo 430 del CGP prevé que presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al

demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

Nótese, que tales preceptos consagran que la obligación objeto de recaudo por la vía compulsiva debe ser **clara**, vale decir, fácilmente inteligible y entendida en un solo sentido y, si es una suma de dinero, debe ser determinada o determinable mediante una simple operación aritmética, de tal forma que haya certeza sobre su monto, pues de no ser así no reuniría esta condición esencial del título ejecutivo y, por tal motivo, no sería susceptible de cobro forzado.

También debe ser **expresa**, esto es, que debe constar en forma nítida el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado, o aparezca manifiesta de la redacción del título, sin que para ello haya que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógicos jurídicos o sea considerada una consecuencia implícita.

Por último, debe ser **exigible**, es decir, que puede demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de plazo o condición, o sea, vencido el primero o acaecida la segunda o, si se trata de una obligación pura y simple (no está sometida a plazo o condición), su exigibilidad opera previo requerimiento al deudor, el cual se suple con la notificación del mandamiento ejecutivo (art. 423 CGP).

Ahora bien, como el título ejecutivo lo constituyen las sentencias de primer y segundo grado dictadas el 18 de diciembre de 2015 por este Juzgado y el 27 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con la respectiva constancia de ejecutoria, y la parte demandante justificó la acción ejecutiva en que la entidad demandada no ha dado cumplimiento a las aludidas providencias, resulta forzoso determinar si la obligación que el actor persigue en este ámbito procesal cumple los requisitos de procedibilidad de la acción ejecutiva y si están reunidos los presupuestos formales y sustanciales que se requieren para librar el mandamiento de pago deprecado.

En primer lugar, es innegable que la demanda ejecutiva fue presentada después de los diez (10) meses, contados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, toda vez que ésta quedó en firme el 4 de agosto de 2017 (fl. 41) y aquélla fue radicada el 7 de febrero de 2020 (fl. 1); y además no operó la caducidad de la acción ejecutiva, en la medida en que la exigibilidad de la obligación reclamada se materializó 5 de junio de 2018 y, por tanto, el término de los cinco años para promover vencería el 5 de junio de 2023.

En segundo lugar, el título aportado como base de recaudo satisface las exigencias formales, si se tiene en cuenta que las sentencias objeto de ejecución fueron allegadas en copia auténtica y con la constancia de ejecutoria, de modo que cumple las previsiones del inciso 2 del artículo 215 del CPACA y el numeral 2 del artículo 114 del CGP.

En tercer lugar, la obligación perseguida es expresa, clara y actualmente exigible.

Es expresa, dado que aparece manifiesta en la parte resolutive de la sentencia de primera instancia que, a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

*"(...) SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, reliquide en debida forma, reconozca y pague al demandante ARIEL URIBE OROZCO, identificado con C.C. No. 5.944.212, el valor de la pensión de vejez equivalente al 75% del promedio de **todos los salarios devengados en el último año de servicios**, desde el 1 de enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2004 (Asignación básica, bonificación por servicios prestados (1/12), prima de servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12)), reliquidación que procede desde el 2 de octubre de 2010, y con efectos fiscales a partir de esa misma fecha conforme motiva de esta sentencia.*

*Al momento de hacer la liquidación para pagar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente*

reconocido. Igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar, sólo en el porcentaje que le corresponda por ley al accionante y conforme a la parte motiva de la sentencia.

TERCERO. La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula.

$$R = R.H. \times \frac{\text{INDICE FINAL}}{\text{INDICE INICIAL}}$$

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de emolumentos salariales y prestacionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes o decretados durante dicho periodo, como se indicó en la parte motiva de la presente providencia. Es entendido que, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará mes por mes, para cada mesada pensional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los reajustes causados periódicamente, para deducir la indexación que afecta las sumas causadas.

CUARTO: Se ordena dar cumplimiento a esta providencia con observancia de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA". (Errores propios del texto y subrayado fuera del texto).

Tal providencia fue modificada por la de segunda instancia, en los siguientes términos:

"Primero.- SE MODIFICA la sentencia de 18 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo del Circuito de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor Ariel Uribe Orozco contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en el sentido de que la liquidación debe ser efectiva a partir del 11 de abril de 2009, por cuanto operó el fenómeno de la prescripción, y no desde el 2 de octubre de 2010, conforme a lo expuesto en la parte motiva".

Lo anterior significa que en los documentos arrimados como título compulsivo consta en forma nítida un crédito a favor del ejecutante y una deuda a cargo de la ejecutada, por concepto de reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de los factores salariales adicionales devengados en el último año de servicios (prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por servicios prestados), partidas sobre las cuales se deben deducir los aportes al sistema de pensiones, que en el caso del demandante corresponde a los últimos tres (3) años laborados, dado que en la sentencia se dispuso la aplicación de la prescripción trienal, debidamente indexados.

Sobre la deducción de los aportes al sistema general de pensiones a cargo del trabajador, la sentencia de primer grado discernió así:

"(...) c) Los aportes del demandante están sujetos a la prescripción trienal porque el cumplimiento de la obligación de pagar la cotización no dependía directamente de su actuar, sino que estaba sujeto a la retención correspondiente, por lo tanto, el cumplimiento de la legalidad y del principio de confianza legítima se vulneran cuando su actuar está sujeto a procedimientos ajenos a su voluntad" (Subrayado fuera del texto).

Y, la sentencia de segundo grado, concluyó:

"En lo que respecta a los descuentos por concepto de aportes a pensión que la entidad debía hacer sobre los factores salariales devengados durante el último año de servicios de los empleados, si los mismos no fueron efectuados en su momento, podrán realizarse previa la reliquidación de la pensión".

Es clara, en tanto es inteligible, y además fue determinada mediante una operación aritmética, de modo que cumplió la carga procesal de liquidar la condena (fls. 3 a 7).

Es exigible, en la medida en que las sentencias invocadas como título ejecutivo quedaron ejecutoriadas el 4 de agosto de 2017 y el término de diez (10) meses previsto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA expiró el 5 de junio de 2018, de suerte que la exigibilidad de la obligación contenida en dichas providencias se consumó a partir de esta fecha y desde entonces el acreedor quedó habilitado para promover su ejecución ante esta jurisdicción, lo cual hizo antes de vencerse el término de caducidad de los cinco (5) años.

Recapitulando, la obligación perseguida por el actor consiste en el pago de las diferencias pensionales derivadas de la re-liquidación ordenada en las sentencias objeto de ejecución que le dejó de cancelar la UGPP porque le descontó un mayor valor por concepto de aportes al sistema de pensiones sobre los factores salariales adicionales que se incluyeron en el ingreso base de liquidación, esto es, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la bonificación por servicios prestados, pues adujo que el monto a deducir era de \$3'325.828,87 y no de \$10'769.503,21 como lo hizo, de modo que el saldo insoluto asciende a \$7'443.674,34.

No obstante, se advierte que la orden de pago solicitada en el libelo compulsivo no se ajusta a las normas legales aplicables a la sentencia objeto de ejecución, motivo por el cual y en atención a lo prescrito en el artículo 430 del CGP se procederá a librar el mandamiento ejecutivo en la forma que legalmente corresponde.

En primer lugar, no es procedente tener al Ministerio del Interior como tercero interesado en este trámite ejecutivo, en la medida en que, si bien fungió como empleador del actor, las sentencias objeto de ejecución no le son vinculantes, si se tiene en cuenta que no intervino en el proceso ordinario en el cual se dictaron tales providencias.

En segundo lugar, en cuanto a la tasa de cotización, se recuerda que el artículo 2 de la Ley 4ª de 1966 dispuso que la correspondiente a los trabajadores sería del 5% del salario mensual, el cual se mantuvo invariable en el Decreto 1089 de 1983, que aprobó el Acuerdo 32 de 1983 de la Caja Nacional de Previsión, y en la Ley 33 de 1985, mientras que la correspondiente a los empleadores sería del 8%, sin discriminar en el caso de los empleados la proporción asignada a salud y a pensión.

Posteriormente, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 previó que la tasa de cotización para la pensión de vejez sería del 8% en 1994, 9% en 1995 y 10% en 1996, calculada sobre el ingreso base, más el 3,5% de gastos de administración del sistema, para una tasa total del 11,5%, 12,5% y 13,5%, respectivamente, y a partir del 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró a regir el sistema general de pensiones, los empleadores debían asumir el 75% y los trabajadores el 25% del pago de la cotización total.

El artículo 7 de la Ley 797 de 2003 subrogó el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, y prescribió que a partir del 1º de enero de 2004 la tasa de cotización se incrementaría en uno por ciento (1%) sobre el IBC, desde el 1º de enero de 2005 en medio por ciento (0,5%) adicional, a partir del 1º de enero de 2006 en otro medio por ciento (0,5%), y desde el 1º de enero de 2008 el Gobierno Nacional podría aumentarla en un punto adicional (1%) siempre y cuando el crecimiento del PIB fuere igual o superior al 4% durante los dos (2) años anteriores. También reiteró que el empleador continuaría pagando el 75% de la cotización total y el trabajador el 25% restante.

En tercer lugar, con base en la certificación electrónica de tiempos laborados "CETIL" expedida el 22 de enero de 2020 por la Subdirectora de Gestión Humana del Ministerio del Interior y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Hacienda, en la cual se indican los valores pagados al actor por concepto de bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, durante el período comprendido entre el mes de mayo de 1980 y el 31 de diciembre de 2004, factores salariales sobre los cuales no se efectuaron en su momento los descuentos por concepto de cotizaciones al sistema general de pensiones (fls. 64 a 82), se procederá a liquidar su monto con su respectiva indexación sobre tales partidas devengadas en los últimos tres (3) años de servicios, por la prescripción trienal. Veamos:

**1. Cálculo del monto de los aportes del actor al sistema general de pensiones sobre los nuevos factores salariales incluidos en la re-liquidación pensional que percibió durante los últimos tres (3) años de servicios, en razón a la prescripción trienal, indexados desde cuando se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria de las sentencias objeto de ejecución (4 de agosto de 2017)**

AÑO	MES	FACTORES SALARIALES ADICIONALES	VALOR PAGADO	TASA DE COTIZACIÓN	PORCENTAJE DE APORTE A CARGO DEL TRABAJADOR	APORTE PENSIÓN TRABAJADOR	ÍNDICE INICIAL (FECHA DE CAUSACIÓN)	ÍNDICE FINAL (4 DE AGOSTO DE 2017)	VALOR INDEXADO
2002	JULIO	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 798.316	13,50%	3,375%	\$ 26.943	48,82	99,3	\$ 54.802
	DICIEMBRE	PRIMA DE VACACIONES	831.579	13,50%	3,375%	28.066	49,83	99,3	55.929
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1'732.457	13,50%	3,375%	58.470	49,83	99,3	116.518
2003	JULIO	PRIMA DE SERVICIOS	775.692	13,50%	3,375%	26.180	52,26	99,3	49.744
	DICIEMBRE	PRIMA DE SERVICIOS	41.112	13,50%	3,375%	1.388	53,07	99,3	2.596
	DICIEMBRE	PRIMA DE VACACIONES	872.498	13,50%	3,375%	29.447	53,07	99,3	55.098
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1'882.210	13,50%	3,375%	63.525	53,07	99,3	118.862
2004	DICIEMBRE	PRIMA DE SERVICIOS	482.157	14,50%	3,625%	17.478	55,99	99,3	30.998
	DICIEMBRE	PRIMA DE VACACIONES	918.563	14,50%	3,625%	33.298	55,99	99,3	59.055
	DICIEMBRE	PRIMA DE NAVIDAD	1'913.053	14,50%	3,625%	69.348	55,99	99,3	122.991
TOTAL APORTES INDEXADOS (04/08/2017)									\$ 666.594

En consecuencia, los aportes al sistema general de pensiones que las sentencias objeto de ejecución ordenaron descontar sobre los nuevos factores salariales que se incluyeron en el ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para re-liquidar la pensión de vejez del demandante, debidamente indexados desde cuando se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria, ascienden a \$666.594, mientras que la deducción efectuada por la UGPP por el mismo concepto, en la Resolución No. RDP 039514 del 28 de septiembre de 2018 fue de \$10'769.503,21, de modo que se le descontó en exceso la suma de \$10'102.909, diferencia que debe ser restituida al actor con los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se pague tal obligación.

**2. Cálculo de los intereses moratorios causados sobre el saldo insoluto desde el día siguiente a la ejecutoria de las sentencias (5 de agosto de 2017) hasta la fecha de la presente providencia (19 de octubre de 2021)**

El artículo 192 del CPACA prescribe que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y, para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada; y las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, y cumplidos tres (3) meses desde esta fecha, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

El artículo 195 *ibídem* prevé que las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, y una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso 2 del artículo 192 *ejusdem*, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.

El artículo 884 del Código de Comercio prevé que cuando en un negocio mercantil haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la

Ley 45 de 1990. El interés bancario corriente se probará con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria (actualmente Financiera).

En el presente caso, la parte ejecutante no probó que haya cumplido con la carga procesal de que trata el artículo 192 del CPACA, toda vez que no allegó copia de la solicitud de cumplimiento de la sentencia con la correspondiente constancia de radicación; no obstante, en el acto administrativo que cumplió con las sentencias de instancia se advirtió que el actor radicó solicitud de cumplimiento el 6 de agosto de 2018, de manera que se causaron intereses moratorios durante los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria, es decir, entre el 5 de agosto y 5 de noviembre de 2017, y como el 6 de agosto de 2018 el apoderado de la demandante pidió el cumplimiento, se calcularán intereses a partir de esa fecha, de suerte que los réditos resarcitorios dejaron de generarse entre el 6 de noviembre de 2017 y el 5 de agosto de 2018, y a partir del 6 de agosto de 2018 se reanudó su causación a la tasa comercial toda vez que el 5 de junio de 2018 expiró el término de los diez (10) meses de que trata el artículo 195 del CPACA.

2.1. Los intereses moratorios a la tasa de DTF se reflejan en el siguiente cuadro:

PERIODO		INTERÉS MENSUAL DTF	INTERÉS DIARIO DTF	NÚMERO DE DÍAS	CAPITAL ADEUDADO A LA EJECUTORIA	INTERÉS CAUSADO
DESDE	HASTA					
5-ago-17	31-ago-17	5,58%	0,01488%	27	\$ 10'102.909	\$ 40.583
1-sep-17	30-sep-17	5,52%	0,01472%	30	10'102.909	44.620
1-oct-17	31-oct-17	5,46%	0,01457%	31	10'102.909	45.619
1-nov-17	5-nov-17	5,07%	0,01355%	5	10'102.909	6.845
INTERESES MORATORIOS A LA TASA DTF (5/NOV/2017)						\$ 137.666

2.2. Los intereses moratorios a la tasa comercial se generaron desde el 6 de agosto de 2018 hasta el 19 de octubre de 2021 (fecha de esta providencia), los cuales se reflejan en el siguiente cuadro:

PERIODO		RESO LUCI ÓN No.	INTERÉS CORRIEN TE MENSUAL	INTERÉS DIARIO MORATORIO	INTERÉS MENSUAL MORATORIO	NÚMER O DE DÍAS	INTERÉS EFECTIVO ANUAL MORATORI O	CAPITAL ADEUDADO A FECHA DE EJECUTORI A	INTERESE S MORATO RIOS
DESDE	HASTA								
6-ago-18	31-ago-18	1112	19,81%	0,07130%	2,19175%	26	29,72%	\$10'102.909	\$ 187.300
1-sep-18	30-sep-18	1112	19,81%	0,07130%	2,19175%	30	29,72%	10'102.909	216.116
1-oct-18	31-oct-18	1294	19,63%	0,07073%	2,17401%	31	29,45%	10'102.909	221.530
1-nov-18	30-nov-18	1521	19,49%	0,07029%	2,16019%	30	29,24%	10'102.909	213.035
1-dic-18	31-dic-18	1708	19,40%	0,07000%	2,15129%	31	29,10%	10'102.909	219.239
1-ene-19	31-ene-19	1872	19,16%	0,06924%	2,12752%	31	28,74%	10'102.909	216.841
1-feb-19	28-feb-19	111	19,70%	0,07096%	2,18091%	28	29,55%	10'102.909	200.721
1-mar-19	31-mar-19	263	19,37%	0,06991%	2,14832%	31	29,06%	10'102.909	218.939
1-abr-19	30-abr-19	389	19,32%	0,06975%	2,14337%	30	28,98%	10'102.909	211.394
1-may-19	31-may-19	574	19,34%	0,06981%	2,14535%	31	29,01%	10'102.909	218.640
1-jun-19	30-jun-19	697	19,30%	0,06968%	2,14139%	30	28,95%	10'102.909	211.200
1-jul-19	31-jul-19	829	19,28%	0,06962%	2,13941%	31	28,92%	10'102.909	218.041
1-ago-19	31-ago-19	1018	19,32%	0,06975%	2,14337%	31	28,98%	10'102.909	218.440
1-sep-19	30-sep-19	1145	19,32%	0,06975%	2,14337%	30	28,98%	10'102.909	211.394
1-oct-19	31-oct-19	1293	19,10%	0,06904%	2,12157%	31	28,65%	10'102.909	216.240
1-nov-19	30-nov-19	1474	19,03%	0,06882%	2,11462%	30	28,55%	10'102.909	208.587
1-dic-19	31-dic-19	1603	18,91%	0,06844%	2,10270%	31	28,37%	10'102.909	214.336
1-ene-20	31-ene-20	1768	18,77%	0,06799%	2,08877%	31	28,16%	10'102.909	212.930
1-feb-20	29-feb-20	94	19,06%	0,06892%	2,11760%	29	28,59%	10'102.909	201.915
1-mar-20	31-mar-20	205	18,95%	0,06856%	2,10667%	31	28,43%	10'102.909	214.737
1-abr-20	30-abr-20	351	18,69%	0,06773%	2,08080%	30	28,04%	10'102.909	205.283
1-may-20	31-may-20	437	18,19%	0,06612%	2,03083%	31	27,29%	10'102.909	207.082
1-jun-20	30-jun-20	505	18,12%	0,06589%	2,02382%	30	27,18%	10'102.909	199.716

1-jul-20	31-jul-20	605	18,12%	0,06589%	2,02382%	31	27,18%	10'102.909	206.373
1-ago-20	31-ago-20	685	18,29%	0,06644%	2,04085%	31	27,44%	10'102.909	208.093
1-sep-20	30-sep-20	769	18,35%	0,06664%	2,04685%	30	27,53%	10'102.909	201.967
1-oct-20	31-oct-20	869	18,09%	0,06580%	2,02081%	31	27,14%	10'102.909	206.069
1-nov-20	30-nov-20	947	17,84%	0,06499%	1,99570%	30	26,76%	10'102.909	196.967
1-dic-20	31-dic-20	1034	17,46%	0,06375%	1,95740%	31	26,19%	10'102.909	199.663
1-ene-21	31-ene-21	1215	17,32%	0,06329%	1,94325%	31	25,98%	10'102.909	198.233
1-feb-21	28-feb-21	64	17,54%	0,06401%	1,96547%	28	26,31%	10'102.909	181.078
1-mar-21	31-mar-21	161	17,41%	0,06359%	1,95235%	31	26,12%	10'102.909	199.153
1-abr-21	30-abr-21	305	17,31%	0,06326%	1,94224%	30	25,97%	10'102.909	191.740
1-may-21	31-may-21	407	17,22%	0,06297%	1,93313%	31	25,83%	10'102.909	197.210
1-jun-21	30-jun-21	509	17,21%	0,06294%	1,93211%	30	25,82%	10'102.909	190.750
1-jul-21	31-jul-21	622	17,18%	0,06284%	1,92908%	31	25,77%	10'102.909	196.801
1-ago-21	31-ago-21	804	17,24%	0,06303%	1,93515%	31	25,86%	10'102.909	197.415
1-sep-21	30-sep-21	931	17,19%	0,06287%	1,93009%	30	25,79%	10'102.909	190.551
1-oct-21	19-oct-21	1095	17,08%	0,06251%	1,91894%	19	25,62%	10'102.909	119.992
TOTAL INTERESES MORATORIOS A LA TASA COMERCIAL HASTA LA PRESENTE PROVIDENCIA (19/10/2021)									\$7'945.710

Recapitulando, por concepto de capital indexado (suma descontada en exceso por concepto de aportes al sistema general de pensiones) la entidad ejecutada le adeuda al ejecutante la suma de \$10'102.909, por intereses moratorios a la tasa DTF el valor de \$137.666 y por intereses moratorios a la tasa comercial el monto de \$7'945.710, para un total de **\$18'186.285**.

Corolario, de conformidad con el artículo 431 del CGP se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído cancele al ejecutante el valor de \$18'186.285, y sobre la solicitud de condena en costas a la parte ejecutada se decidirá en la debida oportunidad procesal.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, dispone:

**PRIMERO:** LIBRAR mandamiento ejecutivo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a favor del señor Ariel Uribe Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.944.212 expedida en Bogotá, por la suma de **dieciocho millones ciento ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos (\$18'186.285) m/cte**, discriminada en los siguientes conceptos:

- 1. Por la suma de diez millones ciento dos mil novecientos nueve pesos (\$10'102.909) m/cte, por concepto de reintegro del mayor valor descontado por aportes al sistema de pensiones sobre los factores salariales adicionales incluidos en el ingreso base de liquidación que fue tenido en cuenta para re-liquidar la pensión de vejez en cumplimiento de las sentencias que sirven de título ejecutivo.
- 2. Por la suma de ocho millones ochenta y tres mil trescientos setenta y seis pesos (\$8.083.376) m/cte, por concepto de intereses moratorios a la tasa del DTF y a la tasa comercial causados desde día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (5 de agosto de 2017) hasta la fecha de esta providencia (19 de octubre de 2021).

**SEGUNDO:** NOTIFICAR personalmente esta providencia a la parte demandada, a través de su representante legal o a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la agente del Ministerio Público delegada ante este Juzgado, y ADVERTIR a la entidad ejecutada que deberá pagar la suma adeudada dentro de los cinco (5) días y podrá formular excepciones de mérito en el término de diez (10) días (arts. 431 y 442 CGP), plazos que correrán simultáneamente y se contarán desde el día siguiente a la notificación de esta providencia, conforme al artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.



**TERCERO:** RECONOCER al Dr. Jairo Iván Lizarazo Ávila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.456.810 expedida en Bogotá, y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 41146 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte ejecutante, en los términos y para los fines conferidos en el poder obrante a folio 12 del expediente.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Humberto López Narváez'.

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

CC